



Dependencias	Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 15: Para el Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional Defensoría Delegada para los Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo
Radicado No.	E-2025-027490
Oficio	PDM15-SCSTCC – 54/25
Tema	Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-419 de 2024
Asunto	Informe de seguimiento a la Corte Constitucional y solicitud para que evalúe asumir el seguimiento de la orden sexta de la sentencia.

Bogotá, D.C., 30 de enero de 2025

1. ASUNTO

Informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia de unificación SU-419 de 2024.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes de la Sentencia SU-419 de 2024¹

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó la acción de tutela que presentaron José María Arroyo Izquierdo y Hermes Torres Torres, miembros de la Directiva General elegida en el año 2014, junto con otras autoridades como Mayores, Mamos y representantes de asentamientos del pueblo Arhuaco, en contra del Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y el señor Zarwawiko Torres Torres.

Los accionantes solicitaron la protección de los derechos fundamentales colectivos a la autonomía y a la integridad del pueblo Arhuaco, al igual que sus derechos fundamentales individuales a la participación en la toma de decisiones, a la igualdad y al debido proceso. A su juicio, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior vulneró dichos derechos, pues inscribió en el registro de autoridades tradicionales a una persona como cabildo gobernador del Resguardo de la Sierra Nevada de Santa Marta y la certificó en dicha calidad, a pesar de que sabía que al interior del pueblo Arhuaco existía una controversia en torno al proceso de elección en el que dicha persona fue designada. Así, una parte del pueblo Arhuaco consideró que la elección de la autoridad tradicional, la cual tuvo lugar entre el 10 y el 17 de junio de 2020, fue ilegítima porque incurrió en varios vicios contrarios al derecho propio y ocurrió en un momento en el que estaban vigentes las medidas de aislamiento impartidas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del Covid 19.

En consecuencia, además de dejar sin efectos la inscripción del cabildo gobernador del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en el registro de autoridades tradicionales a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, los actores pidieron ordenar al Ministerio del Interior generar escenarios propios para que el pueblo Arhuaco pueda solucionar el conflicto político interno y tomar decisiones consensuadas. Según los accionantes, en dicho pueblo existe una división interna entre quienes impulsaron el proceso electoral y quienes lo consideraron ilegítimo.

¹ Síntesis extraída del comunicado de prensa.

La sentencia precisó que el Ministerio del Interior vulneró los derechos a la autonomía, al autogobierno y a la identidad e integridad étnica y cultural del pueblo Arhuaco. Lo anterior porque, en contravía de sus propias directrices, inscribió en sus bases de datos en dos oportunidades consecutivas a una autoridad tradicional **a pesar de que conocía de la existencia de un grave conflicto interno sobre la conformidad del proceso eleccionario llevado a cabo con el derecho propio**. Esta acción, además, agravó el desencuentro político y aumentó la polarización al interior del pueblo Arhuaco.

La Corte explicó que, según las partes, el conflicto del pueblo Arhuaco es, en principio, político-administrativo, y de conformidad con el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, no es a la Corte a quien le corresponde resolverlo.

Las partes del conflicto están en desacuerdo sobre cuatro cuestiones. (i) Cuáles son las funciones de gobierno que se le atribuyen a las cuatro Kankurwas y si todas tienen la misma preeminencia en la designación del cabildo gobernador. (ii) Si existe o no un vocero o representante de las Kankurwas que deba participar en los procesos de consulta sagrada con la Zaku (Madre) y en los trabajos espirituales a realizar para designar a un candidato en el cargo de cabildo gobernador. (iii) Cuáles son el rol y las funciones que cumple la Asamblea General en el marco del proceso eleccionario de cabildo gobernador. (iv) Cuál es el lugar en el que se debe reunir dicho órgano.

La Sala Plena optó por un remedio escalonado que busca maximizar los principios de autonomía indígena y de acción sin daño, al igual que promover el diálogo entre los Mamos del pueblo Arhuaco. En ese sentido, por un lado, la Sala Plena invitó a esas autoridades tradicionales a que se reúnan con el fin de resolver el desencuentro y de establecer una fórmula temporal o definitiva respecto a quién o quiénes deben ser registrados como cabildo(s) gobernador(es) del pueblo Arhuaco y representante legal del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada. Por otro lado, la Corte solicitó a los Mamos del pueblo Arhuaco que, en un plazo que no exceda de los 6 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, le informen a las autoridades públicas qué persona o que junta de personas ostenta, de forma transitoria o definitiva, la calidad de representante legal del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

2.2. Solicitud de seguimiento

“Decimoprimer. ORDENAR a la Procuraduría Delegada para verificar el cumplimiento de los fallos de tutela de la Corte Constitucional y a la Defensoría del Pueblo realizar el seguimiento y acompañamiento permanente al cumplimiento de las órdenes de esta sentencia, para lo cual deberán ejercer todas las facultades constitucionales y legales con las que cuenten y rendir informes cada seis (6) meses ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, quien ejercerá la supervisión general de dicho proceso. En todo caso, la Corte se reserva la posibilidad de asumir la competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta providencia”.

3. INFORMES DE CUMPLIMIENTO

3.1. Informe de la parte accionante dentro del proceso de tutela

3.1.1. El 17 de enero de 2025, esta delegada recibió un escrito² firmado por algunas autoridades tradicionales del Pueblo Arhuaco donde solicitan a la PGN “abstenerse de legitimar la reunión de mamós de un sector del Pueblo Arhuaco que se realizó en Simonorwa los días 9 y 10 de enero de 2025, la cual no se rigió por La ley de Origen del Pueblo Arhuaco (Kunsamu), la cual consuetudinaria de acuerdo a los usos y costumbres de nuestro pueblo, así como a la Dirección de Asuntos Indígenas Rrom y minorías abstenerse de registrar a Zarwawiko Torres Torres como Cabildo Gobernador o Representante legal del Resguardo arhuaco de la Sierra”. En este documento se informa que:

3.1.1.1. Al 13 de enero de 2025, la sentencia no había sido debidamente notificada y su publicación en la página web de la Corte Constitucional no debe entenderse como una notificación. Consideran que la notificación es importante para determinar los efectos jurídicos de la sentencia, entre otros, la presentación de una solicitud de nulidad.

3.1.1.2. El acercamiento en Simonorwa, programado para los días 9 y 10 de enero de 2025, surgió de un acuerdo suscrito el 27 de diciembre de 2024 en la ciudad de Valledupar. Allí se dispuso que “las partes conformadas por las Autoridades Tradicionales acuerdan que se realizará un encuentro de acercamiento en el centro de Simonorwa” con el propósito de **generar un espacio propicio para la resolución del conflicto interno del Resguardo Arhuaco de la Sierra**. Por lo tanto, en concepto de los accionantes, este encuentro no tenía como finalidad la elección del cabildo gobernador. Al respecto, en el referenciado documento se establece que “[p]revio al desplazamiento a Simonorwa, se tuvo conocimiento de acciones por parte del sector que respalda el registro de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador, quienes buscaban imponer una metodología y reglas que contravenían la naturaleza dialógica del acercamiento. A pesar de las preocupaciones por la falta de garantías, se optó por asistir al encuentro en cumplimiento del compromiso adquirido”.

3.1.1.3. Según el escrito, en la reunión llevada a cabo en el Simonorwa, la contraparte estableció unilateralmente las reglas y los procedimientos, tales como la designación de la biblioteca como lugar del encuentro, la restricción de acceso exclusivamente a los Mamós y autoridades, así como la incorporación de figuras de seguridad. Conforme a lo anterior, en el documento se determina que estas disposiciones desdibujaron el propósito del acercamiento, transformándolo en un escenario controlado que limitaba el diálogo inclusivo.

3.1.1.4. Los accionantes consideran que la nueva elección es ilegítima “[a]l no haberse notificado la sentencia y, por ende, no encontrarse esta en firme, según los argumentos expuestos en el acápite anterior, puede inferirse que no procede el levantamiento de la medida provisional establecida en el ordinal segundo del Auto 149 de 2022”.

² Archivo Oficio de la Confereración Indígena Tayrona.pdf, folios 1 a 21.

3.2. Informe de algunas autoridades del Pueblo Arhuaco

3.2.1. El 24 de enero de 2025, esta delegada recibió un oficio³ suscrito por algunos Mamos del pueblo Arhuaco en el que solicitan **“ayuda para rendir informe sobre el cumplimiento a los resuelve sexto y séptimo de la sentencia SU-419 del 2024”**. En este documento se estableció que el 9 y 10 de enero del 2025, se realizó un encuentro de Mamos en el centro de Simonorwa, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral sexto de la Sentencia SU-419 de 2024. En ese sentido, solicitaron a esta delegada colaboración para rendir informe al Ministerio del Interior y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar sobre el resultado del encuentro, en los términos del numeral séptimo del mencionado fallo. Se anexó a la solicitud un acta del encuentro⁴; la relatoría de dicho espacio autónomo⁵; un listado de asistencia a la reunión⁶; la convocatoria a ese espacio de encuentro⁷; y el acta mediante la cual se acordó el encuentro⁸.

3.2.1.1. En el acta del encuentro, se establece que el 9 y 10 de enero de 2025, en el centro de Simonorwa, se reunieron 134 Mamos del Pueblo Arhuaco provenientes de los 34 asentamientos, con el objeto de dar cumplimiento a la Sentencia SU-419 de 2024 “frente la elección del Cabildo Gobernador”.

3.2.1.2. Según el escrito, los Mamos acordaron como reglas para el encuentro que (i) solo podían asistir quienes tuvieran formación como Mamos, “sin la injerencia de terceros internos o ajenos al pueblo iku”; (ii) el objeto del encuentro era dar cumplimiento a lo resuelto en los numerales sexto y séptimo de la sentencia; (iii) se acordó no usar teléfonos celulares por ninguna de las partes durante el dialogo; (iv) se autorizó a un fotógrafo por cada una de las partes para el registro del encuentro; (v) se autorizó un traductor para cada una de las partes, los cuales fueron escogidos por los Mamos; y (vi) se aceptó el acompañamiento del Ministerio Público durante todo el espacio de dialogo.

3.2.1.3. A continuación, el oficio indica que la parte accionante dentro del trámite de tutela hizo presencia el 9 de enero, a partir de las 2:30 p.m., a través de autoridades y líderes del pueblo Arhuaco, sin embargo, ninguna de estas personas ostentaba la calidad de Mamo. Al respecto, explica que esta situación imposibilitó entablar un diálogo con la parte accionante sobre las decisiones de los Mamos. Agrega que la parte accionante trató de imponer sus condiciones políticas y técnicas, en contravía de la ley de origen. A su vez, asegura que los 134 Mamos del Pueblo Arhuaco informaron a los líderes de la parte accionante sobre su decisión de “ratificar y mantener la elección del Señor Zarwawiko Torres Torres como Cabildo Gobernador y representante legal del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra”, de conformidad con la elección realizada en junio de 2020 y ratificada en abril de 2022, julio de 2024 y enero de 2025. Lo anterior, “de manera transitoria, hasta tanto se alcance un diálogo con algunos mamos que se declaran en desacuerdo con la elección del Cabildo Gobernador”.

³ Archivo Solicitud AYUDA PROCURADURIA.pdf, folios 1 a 3.

⁴ Archivo ACTA DEL ESPACIO AUTONOMO DE LOS MAMOS DEL PUEBLO ARHUACO en Simonorwa.pdf, folios 1 a 9.

⁵ Archivo RELATORIA DEL ESPACIO AUTONOMO DE LOS MAMOS DEL PUEBLO ARHUACO SIMONORWA.pdf, folios 1 a 12.

⁶ Archivo FIRMA DE LOS MAMOS DEL ENCUENTRO 9 Y 10 DE ENERO en Simonorwa.pdf, folios 1 a 17.

⁷ Archivo Convocatoria a los MAMOS.pdf, folios 1 y 2.

⁸ Archivo Acta del 27 de diciembre de 2024, de las partes en Valledupar.pdf, folios 1 y 2.

3.2.1.4. De otra parte, el acta aclara, entre otros elementos, que (i) el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, representa en promedio, una población de 53.000 habitantes, 34 asentamientos y 10 sectores; (ii) no se entabló diálogo con la parte accionante sobre la elección del Cabildo Gobernador, ante su falta de representación a través de Mamos; (iii) la decisión de los Mamos sobre dicho Cabildo Gobernador, busca mejorar la calidad de vida del pueblo Arhuaco y la garantía de sus derechos fundamentales; y (iv) quienes han deslegitimado y desconocido las decisiones de los Mamos sobre el Cabildo Gobernador, si bien son miembros del pueblo Arhuaco, no ostentan la calidad de Mamos, ni de autoridades propias del pueblo Arhuaco.

3.2.1.5. El documento también especifica que las delegaciones de Magdalena y Guajira⁹ decidieron que no seguirían cuestionando o deslegitimando la decisión de los Mamos respecto de la elección del Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada. A su vez, explica que, si bien algunos miembros del Resguardo de Businchama desconocen las decisiones espirituales y políticas de los Mamos, las autoridades y Mamos de este resguardo sí las respetan de manera integral, en defensa de la ley de origen y del pueblo Arhuaco.

3.2.1.6. Finalmente, en el acta se establece que la decisión de los 134 Mamos de reafirmar la elección del señor Zarwawiko Torres Torres, de manera transitoria y a partir del 10 de enero de 2025, es legítima de conformidad a lo establecido en la ley de origen. Esto, toda vez que fue una decisión de los Mamos Arhuacos, como máximas autoridades espirituales de ese pueblo.

3.2.1.7. Conforme a todo lo anterior, en el mencionado documento se solicita (i) la posesión del señor Torres Torres como Cabildo Gobernador, en los municipios en los que tenga jurisdicción el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada; y (ii) el registro transitorio ante el Ministerio del Interior del señor Torres Torres como Cabildo Gobernador y representante legal del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada.

3.3. Informe de la Procuraduría Regional del Cesar

3.3.1. El 8 de enero de 2025, el Procurador Regional del Cesar se comunicó con la delegada para el seguimiento al cumplimiento de sentencias de tutela de la Corte Constitucional, con el fin de informar sobre la invitación que el Pueblo Arhuaco realizó a la Procuraduría General de la Nación para acompañar el “encuentro de acercamiento” que se realizaría los días 9 y 10 de enero de 2025, con el objeto de dar cumplimiento a la ordenado en la Sentencia SU-419 de 2024.

3.3.2. En razón de dicha invitación, dos funcionarios de la PGN asistieron a la asamblea como veedores, sin participación. En ejercicio de sus funciones, los servidores remitieron a esta delegada un acta de las situaciones que se presentaron en el desarrollo del “encuentro de acercamiento”. Al respecto, se informó que el 10 de enero, se decidió que el Cabildo Gobernador del Resguardo Arhuaco Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta “era y seguiría siendo el señor Zarawawiko Torres Torres”.

⁹ Según el escrito, representadas por “Luis Salcedo que es Cabildo Gobernador del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco del Sector Arhuaco, el mayor Alfonso Villafañá, [en compañía de] la autoridad mayor José del Carmen Malo, la Lider Margarita Villafañá y [el] mamo Adan Rafael Suarez”.

3.3.3. Del acta¹⁰, se advierte una inconformidad por parte de quienes fungieron como accionantes en la SU-419 de 2024, respecto de la elección del 10 de enero de 2025. *Primero*, hay controversia sobre el objeto de la reunión de los días 9 y 10 de enero; una parte asegura que el objeto era la elección del Cabildo Gobernador y la otra parte asegura que era para determinar las condiciones para la futura elección. *Segundo*, existe controversia sobre la asistencia de todos los Mamos. *Tercero*, hay controversia sobre la participación de terceros.

3.3.4. Pese a lo anterior, el 15 de enero de 2025 se recibió en la PGN una invitación para participar en la ratificación de nombramiento de Cabildo de gobernadores que se llevaría a cabo el 17 de enero de 2025, a las 8:00 am, en la capital espiritual Nabusimake, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta.

3.4. Informe de la Defensoría del Pueblo¹¹

3.4.1. El día 24 de diciembre de 2024, vía correo electrónico, la Defensoría del Pueblo recibió una invitación del doctor Héctor Gabriel Rondón, Viceministro para el Dialogo Social y los Derechos Humanos para acompañar a las partes de la acción de tutela en calidad de Ministerio Público, a la Mesa de Concertación como primer acercamiento de las partes en conflicto después de 4 años de haber iniciado la acción constitucional, adicionalmente anexó la invitación al pueblo Arhuaco, traducida además en Iku, lengua propia del pueblo Arhuaco.

3.4.2. El Viceministro propuso que fuera en la sede de la Defensoría Regional César, por la neutralidad y objetividad que reviste la entidad en materia de garantía de DDHH. Lo cual fue aceptado por el Ministerio Público -Defensoría y Procuraduría- y por las partes sin ningún reparo, lo cual es significativo toda vez que, había una fractura entre el pueblo Ahuaco y la entidad.

3.4.3. La metodología propuesta para realizar la mesa de concertación desde el primer día por parte del Ministerio del Interior, era que las partes nombrarán una comisión y que éstas tomaran las decisiones a que hubiera lugar dentro de su autonomía y gobernabilidad, para efectos de darle cumplimiento a las órdenes del fallo. Por lo cual, se dispuso en la sede de la Regional un espacio para que las partes deliberaran, pero también propusimos crear espacios independientes para que las partes pudieran consultar al resto de autoridades que los acompañaban, lo que en efecto ocurrió.

3.4.4. Una vez las partes nombraron sus comisiones, 6 de cada lado, pasaron al espacio donde tomaron sus decisiones; por parte del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y las autoridades administrativas locales, se les dio la bienvenida y se instaló la mesa. Una vez esto ocurrió, se les dejó solos para que deliberaran sin injerencia, desde su propia autonomía y ley de origen, y acordarán lugar, fecha y hora de la reunión de los Mamos o autoridades si así lo estimaban o las decisiones que considerarán para dar inicio al cumplimiento de la sentencia.

3.4.5. Pasado el mediodía, los comisionados presentaron de manera pública su decisión, la cual quedó en el acta de fecha 27 de diciembre, lo cual recibimos con

¹⁰ Archivo ACTA REUNIÓN CON PUEBLO ARHUACO.pdf, folios 1 a 8.

¹¹ El presente apartado fue redactado por la Defensoría Delegada para los Pueblos Étnicos de la Defensoría del Pueblo.

beneplácito porque históricamente no habían podido tener concertación alguna.

3.4.6. Previo al inicio de la mesa, recalcamos que el Ministerio del Interior representado por el Viceministro y la doctora Roquelina Blanco, Directora de Asuntos Indígenas, se reunieron con las partes en espacios independientes a escuchar sus solicitudes e inquietudes y como Ministerio Público estuvimos presente.

3.4.7. Por lo cual, por parte del Ministerio Público (Defensoría y Procuraduría) se garantizó que la reunión se realizar *sin injerencia de terceros internos o ajenos al pueblo lku*, y que se respetara su autonomía y gobernabilidad, como lo estima la SU-419 de 2024, por lo cual consideramos que fue un espacio exitoso porque tomaron una decisión conjunta y que en principio generó tranquilidad, a tal punto que fuimos invitados expresamente a participar del espacio que se realizaría el 9 y 10 de enero en el Centro Simonorwa ubicado en el Municipio de Pueblo Bello. Ellos explicaron que la decisión del lugar es porque es neutral y sagrado para ellos, para tomar decisiones de acuerdo con sus costumbres ancestrales.

3.4.8. La Delegada para los Pueblos Étnicos de la Defensoría del Pueblo y la Defensora Regional del Cesar, hicieron presencia el 9 y 10 de enero en Simanoruwa para acompañar la reunión, por solicitud del Pueblo Arhuaco. Esta reunión fue programada desde el 27 de diciembre de 2024. Desde la Defensoría se pudo observar que el diálogo entre los accionantes y accionados se dio mayoritariamente en idioma lku y de las traducciones que las partes realizaron se identificó que cada uno tuvo un entendimiento diferente del alcance para el que se convocaron. La parte accionante planteó que era un acercamiento con Mamos y autoridades para analizar cómo iban a resolver el conflicto en el que se encuentran, y los otros, la parte de accionados, que el encuentro de Mamos era para la toma decisión del cabildo Gobernador del Resguardo de la Sierra. Dicho desacuerdo sobre del objetivo de la reunión no se superó en los diálogos adelantados entre los días 9 y 10 de enero del 2025.

3.4.9. Sobre la ratificación de Zawarvico Torrez. El día 9 de enero en la jornada de la mañana algunos Mamos (no los accionantes) solicitaron que del espacio se retiraran quienes no son Manos (líderes y autoridades) y se informó a Ministerio Público que los manos presentes: i) tomarían sus decisiones, ii) que se daría un encuentro integral para notificar su decisión, y iii) que entregarían su documento de acta de decisión. Los Mamos tuvieron un amplio diálogo en idioma lku. Las conclusiones del espacio de los manos que tradujeron para Ministerio Público fue que “habían tomado sus decisiones de ratificar como cabildo Gobernador del Resguardo de la Sierra Nevada a Zawarwiko Torres, era su orientación y que no volverían a retomar el tema”.

3.4.10. La Autoridad del Resguardo del Magdalena y Guajira, quienes participaron en la jornada de la tarde del día 10 y quienes tuvieron conocimiento de la decisión de ratificación de Zawrwiko Torrez, expusieron que ellos estaban vinculados a la sentencia pero que no eran los accionantes, que se vieron afectados por el conflicto interno que hay en el pueblo, que respetaban las decisiones de los Mamos del Resguardo de la Sierra. Sin embargo, considera que: i) “veníamos con la ideas para un espacio de intercambio para buscar la resolución del conflicto”, ii) que “escuchando, no es el momento de decir, porque aún no hay la confianza”, iii) que “hay una decisión, que no nos metemos, pero que tampoco hacemos parte de esa decisión”. En esta intervención se cerrero solicitando la traducción y socialización

de la sentencia.

3.4.11. Conclusiones como Defensoría: i) no se identificó un conceso entre las partes sobre el alcance del encuentro del 9 y 10 de enero del 2025, acordado en el acta suscrita el 27 de diciembre del 2024, ii) se identifica la necesidad de un trabajo técnico/metodológico donde decanten los principios, las reglas, los criterios, los tiempos, los lugares, los objetivos de los espacios y quienes son los llamados a estar en los encuentros y/o reuniones que se programen para resolver sus situaciones y diferencias, iii) se requiere realizar la traducción de la sentencia y adelantar un proceso de socialización al Pueblo Arhuaco, sobre los alcances.

4. SOLICITUD ESPECIAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución la protección otorgada por el juez de tutela “consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”. Cuando dicha orden es adoptada en sede de revisión por la Corte Constitucional, según lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, la decisión debe “ser comunicada inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta”. Excepcionalmente la Corte ordena directamente la notificación directa de sus decisiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el juez de primera instancia es competente para adelantar dos procedimientos destinados a obtener la materialización de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en los fallos de tutela. El primero de ellos es el *trámite de cumplimiento* y el segundo es el *incidente de desacato*. Las diferencias entre estos dos mecanismos procesales han sido objeto de pronunciamiento por la Corte en diferentes oportunidades¹².

El trámite de estos dos procedimientos puede darse en forma paralela o independiente; en todo caso “el desacato no puede desplazar la principal obligación del juez de tutela que consiste en hacer cumplir la orden de tutela”¹³. El juez de primera instancia tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce de los derechos conculcados hasta tanto mantiene la competencia¹⁴.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, “de manera excepcional y ante situaciones límite”¹⁵, la Corte puede asumir la verificación del cumplimiento del fallo de tutela que ha proferido. Esto sucede cuando:

“(i) el juez, a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte, no adopta medidas conducentes; (ii) se ha presentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela, sin que el juez de primera instancia haya podido adoptar medidas [efectivas], o cuando dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces; (iii) el juez de primera

¹² “i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal. ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que, en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia. iv) El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque v) puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público” (sic). Ver Sentencias SU-158 de 2003, T-458 de 2003 y T-744 de 2003.

¹³ *Ibídem*.

¹⁴ Decreto 2591 de 1991, artículo 27.

¹⁵ Entre otros, sentencia SU-1158 de 2003, autos 615A de 2019, 033 de 2016, 037 de 2010, 177 y 271 de 2009, 178 de 2008; 057 de 2007, 249 de 2006, 96B de 2005 y 149A de 2003.

instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste; (iv) la autoridad desobediente es una Alta Corte; (v) resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional; (vi) la intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y (vii) se trata de órdenes complejas emitidas en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, (...) para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones”¹⁶.

Si no se cumple con alguna de las situaciones excepcionales el juez de primera instancia mantiene la competencia que le fue conferida por el Decreto Estatutario 2591 de 1991 para adoptar las medidas que se requieran con el propósito de asegurar el cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia de tutela.

4.1. Vigilancia conjunta al cumplimiento de la Sentencia SU-419 de 2024

Uno de los ejes principales de la sentencia de unificación se enfocó en explicar cómo la actuación del Ministerio del Interior al inscribir en sus bases de datos en dos oportunidades consecutivas a una autoridad tradicional, **a pesar de que conocía de la existencia de un grave conflicto interno sobre la conformidad del proceso electoral llevado a cabo con el derecho propio**, agravó el desencuentro político y aumentó la polarización al interior del Pueblo Arhuaco.

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo consideran imperioso que la Corte Constitucional, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, evalúe la posibilidad de asumir la verificación del cumplimiento de lo ordenado por la Sala Plena en el numeral sexto de la Sentencia SU-419 de 2024, según las circunstancias que se enuncian en este informe de seguimiento. Lo anterior, con el propósito de evitar agravar el conflicto suscitado entre el Pueblo Arhuaco, con la nueva elección del Cabildo Gobernador y su posible inscripción.

Si bien en la sentencia la Corte recordó que es el juez de primera instancia el encargado del cumplimiento de las órdenes emitidas, en este caso, la intervención de la Corte resulta indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, pues solo con un pronunciamiento de la Alta Corte que determine si, a partir de los informes que se allegan con este escrito, el numeral sexto de la sentencia se cumplió, podría evitarse el agravamiento del conflicto entre el Pueblo Arhuaco, que actualmente persiste.

Una lectura detallada del acta de los funcionarios de la PGN y de la Defensoría del Pueblo evidencian, *prima facie*, que esta nueva elección, al igual que las anteriores, se produjo sin antes superar el conflicto entre las partes.

Acorde con las consideraciones dispuestas en la Sentencia SU-419 de 2024, para la Corte es importante que, antes de la elección, se adopten decisiones respecto de las controversias identificadas por la Corte Constitucional. En otras palabras, antes de la elección debería estar claro y acordado (i) ¿cuál debe ser el procedimiento para designar a los cabildos gobernadores del pueblo Arhuaco?; (ii) ¿cuáles son las

¹⁶ Autos 001 de 2021, 615A de 2019, 033 de 2016 y 032 de 2011. Sobre el primer caso, cf. Auto 343 de 2006; sobre el segundo, auto 184 de 2005, 010 y 045 de 2004, y sentencia SU-1185 de 2001; sobre el tercero, autos 012 y 316 de 2008; sobre el cuarto, autos 249 de 2006 y 316 de 2008; sobre el quinto, auto 149A de 2003; sobre el sexto, *ibid*; y sobre el séptimo, autos 035 de 2009, 106 y 009 de 2008, 176 y 177 de 2005 y 050 y 185 de 2004.

funciones de gobierno que se le atribuyen a las cuatro Kankurwas y si todas tienen la misma preeminencia en la designación del cabildo gobernador?; (iii) si existe o no un vocero o representante de las Kankurwas que deba participar en los procesos de consulta sagrada con la Zaku (madre espiritual) y en los trabajos espirituales a realizar para designar a un candidato en el cargo de cabildo gobernador; (iv) ¿cuáles son el rol y las funciones que cumple la Asamblea General en el marco del proceso electoral de cabildo gobernador y, finalmente?; y (v) ¿cuál es el lugar en el que se debe reunir dicho órgano?

De lo contrario, la elección siempre va a ser considerada ilegítima por alguna de las partes, lo cual hará imposible no solo el cumplimiento de las decisiones proferidas por la Corte sino la superación de los hechos que generaron la acción de tutela.

Sin embargo, la Corte también dejó clara la obligación de las autoridades estatales de guiarnos por maximizar: (i) la autonomía indígena y el autogobierno, en función de los cuales le corresponde a cada pueblo indígena determinar quiénes son sus autoridades tradicionales y sus representantes legales de forma autónoma, sin interferencias externas y (ii) el principio de acción sin daño, según el cual las autoridades del Estado están obligadas a no causar daños en el modo de vida, en los derechos o en los procesos propios de los pueblos étnicos.

Así las cosas, es deber de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo informarle a la Corte Constitucional los hechos que se generaron luego de publicada la sentencia en la página web de la Corporación. Situaciones que, se insiste, podrían exacerbar el conflicto político – administrativo identificado por la Corte en la decisión y que exige la adopción de medidas para salvaguardar los derechos fundamentales del Pueblo Arhuaco.

5. Remisión de informes


5.1. En cumplimiento del numeral séptimo de la Sentencia SU-419 de 2024, remitir al Ministerio del Interior y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, el acta -incluidos los anexos- presentada por algunos de los Mamos del Pueblo Arhuaco en la cual informan sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral sexto de la sentencia (*supra* 3.2).

5.2. En cumplimiento del numeral decimoprimer de la Sentencia SU-419 de 2024, remitir al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar y a la Corte Constitucional los informes de (i) la parte accionante, (ii) algunos de los Mamos del Pueblo Arhuaco, (iii) la Procuraduría Regional del Cesar y (iv) de la Defensoría del Pueblo (*supra* 3.1, 3.2., 3.3 y 3.4).

6. Solicitud especial a la Corte Constitucional

6.1. Solicitar a la Corte Constitucional que evalúe la posibilidad de asumir la verificación del cumplimiento de lo ordenado por la Sala Plena en el numeral sexto de la Sentencia SU-419 de 2024 (*supra* 4.1). En concreto establecer, a partir de los informes presentados en este escrito, si el numeral sexto de la sentencia se cumplió.



 Firmado digitalmente
por GONZALEZ RAMOS
ANNA KATERYNE
Fecha: 2025.01.30
16:35:54 -05'00'

Procuradora delegada para el seguimiento
al cumplimiento de sentencias de tutela
proferidas por la Corte Constitucional



Defensora Delegada para los Pueblo
Étnicos

Proyectó: AKGR – PD (PDFM15-SCSTCC)
Sulma Judith Ramos Fayad
Revisó: AKGR – PD (PDFM15-SCSTCC)
Milena Margoth Mazabel
Aprobó: AKGR – PD (PDFM15-SCSTCC)
Milena Margoth Mazabel